

Información Migratoria Nacional

Ubican células de Barrio 18 y la Mara



La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala identificó a células de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 que operan en la frontera con México, donde trabajan para los cárteles en la disputa de territorio y distribución de droga hacia Estados Unidos.

Tanto la Mara Salvatrucha como Barrio 18 fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno de Donald Trump. Además, Barrio 18 es señalada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo como responsable de los motines en diversas prisiones y de asesinar a 10 elementos de la PNC la semana pasada.

De acuerdo con información de la PNC, a la que El Sol de México tuvo acceso, Locos Salvatruchas, célula de la Mara Salvatrucha (MS-13), así como Solo Raperos, Crazy Rich, Solo para Locos, Lo Carnales, los Crazy Gangsters, Crazy Chapín y Little Psycho Criminal, de Barrio 18, colaboran con el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CNGJ) traficando droga y migrantes hacia Estados Unidos.

Según las autoridades guatemaltecas, estas células han pasado a ocupar un papel subordinado dentro la estructura criminal de los grandes cárteles mexicanos en delitos como narcomenudeo, tráfico de migrantes y extorsión.



De acuerdo con Belteton Helver Saia, quien fue jefe de la subdirección general de análisis e información antinarcóticos de la PNC. durante el gobierno del presidente Alejandro Giammatei, la Mara Salvatrucha ha mantenido en distintos momentos alianzas con organizaciones como Los Zetas y los cárteles del Golfo, el CING y el de Sinaloa dentro de Guatemala y en estados mexicanos de la frontera como Chiapas.

"Por décadas ejercieron un poder callejero superior al de la policía mediante el miedo, pero ahora opera como red de venta local de drogas, además como fuerza en la disputa de territorio y el contrabando de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, dentro y fuera de Guatemala", explicó en entrevista con este diario.

"Por su parte, la Barrio 18, considerada una de las maras más numerosas del hemisferio occidental, equiparable en muchos aspectos a su rival más conocido, la Mara Salvatrucha, ha incursionado, incluso en el cultivo de amapola y la instalación y control de laboratorios clandestinos para la fabricación de metanfetaminas, siempre supervisados por los cárteles mexicanos", agregó.

Según Saia, estas pandillas están copiando las tácticas de los cárteles mexicanos, tales como la fabricación casera para atacar a sus contrarios.

"Aunque la Barrio 18 tiene células en operación desde Centroamérica hasta Canadá, su presencia en El Salvador se ha debilitado como resultado de la agresiva campaña emprendida por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo del año 2022. En Guatemala intenta un reacomodo después del traslado de sus principales líderes a las prisiones más seguras del país", dijo.

La semana pasada se registraron una serie de motines en cárceles guatemaltecas, los cuales fueron atribuidos al líder de Barrio 18. Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias Lobo, quien presuntamente pedía mejores condiciones en su celda la cárcel Renovación I, ubicada al sur de Guatemala.

En los motines fueron asesinados 10 policías, además de que 45 trabajadores del sistema penitenciario fueron secuestrados por varias horas.

"Este Gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones", dijo en conferencia de prensa el 18 de enero Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación de Guatemala. El gobierno de Guatemala declaró estado de sitio por 30 días, primero para recuperar el control de las cárceles, y después para capturar a los integrantes de la pandilla.

De acuerdo con la información de la PNC la alianza entre los narcos mexicanos y las pandillas locales se extiende por toda la frontera común y en ambos lados de la misma. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM), señalan que durante 2024, última cifra disponible, un total de 46 pandilleros, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron detenidos al intentar ingresar a territorio mexicano por la frontera de Chiapas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), dependencia del gobierno de Estados Unidos encargada de la seguridad de las fronteras, registró, el mismo año, la captura de 19 maras en su frontera con México. Los pandilleros, de acuerdo con CPB, ingresan a México por la frontera sur como migrantes indocumentados y recorren el país sin ser identificados.

En el camino buscan contactos y negocios con los cárteles de la droga en nuestro país. Algunos de ellos, además, son reclutados por los grupos del crimen organizado para el tráfico de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. ([Roxana González, El Sol de México, Ocho columnas y República, p 4 y La Prensa, Nacional, p. 11](#))

Aumenta ocho veces arresto de mexicanos sin historial criminal en EU



La cifra de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos que han sido arrestados, aun sin contar con antecedentes penales, creció 800 por ciento durante el primer año de la administración Trump, de acuerdo con un informe elaborado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El estudio, publicado esta semana, detalla que desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump el número de mexicanos arrestados en ese país pasó de mil 500 a 13 mil 300.



Los autores del estudio, Paul Ong, Jonathan Ong y Sonja Díaz, explicaron que no se trata de personas con antecedentes criminales graves, una justificación que había dado Trump al inicio de su Gobierno, sino de miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen al desarrollo de Estados Unidos.

Organizaciones de derechos humanos han criticado el endurecimiento de las políticas migratorias, argumentando que las detenciones masivas de personas sin antecedentes criminales generan desintegración familiar, temor en comunidades y posibles violaciones de debido proceso.

Ximena Arias Cristobal relató que su arresto en un centro de detención en Georgia le dejó un sentimiento permanente de incertidumbre y miedo. Aunque su caso se originó por una falta menor (una vuelta incorrecta en su auto, sin licencia), aseguró que su vida “está en Estados Unidos”, pues llegó con su familia cuando tenía cuatro años y se formó en ese país.

Dos migrantes tzotziles originarios de San Juan Chamula, Chiapas, narraron su experiencia tras ser detenidos durante una redada en un restaurante en Pensilvania. Benjamín y su hijo Carlos contaron que, a pesar de estar trabajando, agentes del ICE los esposaron y los trataron con dureza, lo que les provocó miedo y confusión.

“Estábamos trabajando como siempre y nos trataron como si fuéramos asesinos... Solo quería trabajar y ayudar a mi familia”, dijo Carlos, que llevaba apenas tres meses en Estados Unidos buscando oportunidades.

En relatos difundidos en redes y declaraciones a medios, familias mexicanas han descrito cómo detenciones repentinas han afectado su cotidianidad. Un padre de familia que se dirigía a trabajar en Texas fue detenido por agentes migratorios mientras paraba a echar gasolina; tras su arresto, su esposa describió el impacto emocional en sus hijos, que preguntan cada día “¿cuándo volverá papá?”.

El estudio de la UCLA concluyó que, en términos generales, la detención de inmigrantes de origen latino sin antecedentes penales en Estados Unidos se ha multiplicado por seis desde el inicio de la segunda era Trump.

En este sentido, la cifra de mexicanos sin antecedentes detenidos representa más de una cuarta parte de los arrestos en este grupo.

Las estadísticas arrojan que cinco nacionalidades concentran cerca de tres cuartas partes de todas las detenciones de latinos sin historial criminal, además de los mexicanos, 5 mil 600 venezolanos, 8 mil 600 guatemaltecos, 6 mil hondureños y 2 mil 800 ecuatorianos.

El reporte, basado en datos oficiales obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), documentó que de febrero a septiembre de 2025 se detuvo en promedio a 6 mil inmigrantes latinos sin historial criminal al mes, en comparación con cerca de 900 por mes en el mismo periodo de 2024 durante la administración del demócrata Joe Biden.

Con este incremento, la proporción de inmigrantes latinos sin antecedentes penales entre todos los detenidos creció de menos de uno de cada ocho en 2024 a más de uno de cada tres en 2025.

El informe también encuentra que la mayoría de aquellos detenidos sin antecedentes se encuentran en edad productiva (18–54 años). Además, casi siete de cada 10 estuvieron detenidos 15 días o más y alrededor del 60 por ciento fueron transferidos a instalaciones fuera del estado donde vivían antes de su detención.

Bajo el gobierno de Trump, la gran mayoría (casi nueve de cada 10) de los inmigrantes latinos sin antecedentes fueron deportados y sólo una fracción volvió a sus comunidades tras la detención.

El informe también subraya que la actual administración tiene como objetivo mantener un promedio diario de 100 mil inmigrantes en centros de detención, casi el doble del récord anterior de 50 mil 200 personas bajo administraciones anteriores. ([Claudia Arellano, La Razón, Informativa, p. 13](#)) (EFE y AP, Milenio, Fronteras, p. 14)

El doloroso trámite de paisanos pensionados para cobrar en EU



El perro corrió y se abalanzó sobre Norma, moviendo la cola, retozando de alborozo. Pero a sus 85 años, no pudo resistir el peso del animal: cayó y se fracturó una costilla. Esa lesión, la dificultad para caminar y la incontinencia urinaria le han impedido apersonarse en Estados Unidos, un requisito que exige el país para darle la pensión que le dejó su difunto marido.

“No me depositan el dinero porque dicen que no he ido a mostrar que estoy viva, pero podrían hacer una videollamada”, se queja durante una entrevista con MILENIO en la sala de la casa que construyó con el dinero que le enviaba su esposo desde Los Ángeles, fruto de su trabajo en un fábrica de tornillos para el Ejército estadounidense.

Norma en realidad no se llama Norma. Aquí la nombraremos así porque solicitó el anonimato. Teme que alguien del “cártel” que controla su barrio, al sur de la Ciudad de México, se entere y la extorsione creyendo que le llueven dólares por la pensión gringa, cuando en realidad está en un lío porque no le depositan ni un dólar.

Sucede también con otros jubilados y viudas del pueblo oaxaqueño de donde es oriunda, Santiago Zochila, afirma Norma, que no han podido denunciar porque están enfermos o viven en comunidades recónditas de donde emigraron y retornaron jubilados.

Datos de la Administración del Seguro Social estadounidense (SSA, su abreviación en inglés) documentan que del total de las 770 mil personas que viven fuera de la Unión Americana y reciben pensión para el retiro del sistema estadounidense, alrededor de 61 mil 500 viven en México.

La SSA no desglosa el origen étnico o nacionalidad de los jubilados, pero según un estudio de BBVA Research, hay 18 mil 500 ciudadanos nacidos en Estados Unidos que decidieron vivir en México tras su retiro.

Del cruce de cifras, se deduce que el resto –unos 43 mil beneficiarios– son ex migrantes mexicanos que lograron nacionalizarse estadounidenses, trabajar legalmente y cotizar para el retiro y la seguridad social.

Luego, al cumplir la edad para el retiro, se regresaron a México, como el marido de Norma, quien dejó Los Ángeles para volver con su familia a la Ciudad de México.

Prueba de vida para recibir pensión

A diferencia de las políticas que tiene la Unión Americana para sus ciudadanos, a aquellas personas que sólo fueron residentes –y a sus beneficiarios– les exige vivir por lo menos un mes cada seis meses en territorio estadounidense, así vayan en silla de ruedas o en pañales si sufren de incontinencia.

Todo eso lo sabe Norma al dedillo. Es su historia como esposa de un pensionado y porque está mentalmente lúcida aunque no ve bien por la diabetes (mientras habla con MILENIO uno de los párpados se queda pegado). Hoy al andar, arrastra los pies por la hipertensión, los muchos años, la vida.

Brenda Hernández, la nieta que la cuida, entra a la sala con café y galletas y se retira. Norma explica que confrontar al gobierno de Estados Unidos significa, en su caso, buscar que le vuelvan a pagar los 800 dólares mensuales que le suspendió desde enero de 2025, cuando Donald Trump se puso más quisquilloso y exigió más revisiones a las pensiones.

Ella accedió al beneficio social de Estados Unidos cuando murió su esposo en 2011, nueve años después de regresar a México como jubilado. De ese tiempo, solo quedan fotos y recuerdos montados en las paredes.

Aquí se ven sus seis hijos, tres nietos y un bisnieto. Varios de ellos son profesionistas: hay un criminólogo, un contador, un comunicólogo, un veterinario y enfermeras en la Marina Armada de México.

El bisnieto, de 10 años, corre por la sala. Es inquieto y agudo. “¿Usted es la entrevistadora?”, dice antes de echarse a correr hacia el patio para alcanzar al gato de ojazos verdes que tienen que esconder en Día de Muertos para que no se lo lleven, lo desbigoten y lo torturen dizque para rituales del demonio o sepa Dios.

El patriarca estaría muy orgulloso de esta familia si aún viviera. Samuel dice que su padre, como muchos de su generación, nunca quiso nacionalizarse estadounidense, aunque podía hacerlo. Sólo uno de sus hijos –el veterinario– emigró y tiene la nacionalidad. Para el resto, México bastó.

Entre dos mundos de tesón, los Hernández lograron una vida digna.

“Yo sí tuve oportunidades que asocio con la clase media: estudiar, tener Navidad, tenis nuevos Nike o Adidas”, describe Samuel en la entrevista telefónica que fue preámbulo a la visita a la casa de Norma.

Nada importa... hay que acudir y aguantar

Samuel no pudo estar en la entrevista que se le hizo a su madre, pero las versiones de ambos coinciden punto por punto.

Él fue quien se metió a buscar en la Administración del Seguro Social, quien llamó al +1-410-965-0160 (y ya no escribió al P.O. Box 17769 de Baltimore, MD 21235-7769, USA, porque le contestaron antes), y así poco a poco ha comprendido por qué suspendieron el pago de la pensión a su madre.



“Básicamente fue cuando entró Trump que se puso más estricto”, analiza Samuel. Por la pandemia en 2020, el gobierno estadounidense permitió una excepción a la ley y le dio a las personas como Norma un respiro: no tenía la obligación de viajar a Los Ángeles cada medio año, de quedarse allí un mes con una serie de complicaciones, sin la necesaria asistencia las 24 horas al día, gastando por lo menos una cuarta parte de la pensión y otros tantos inconvenientes que preocupan a la familia entera.

Brenda, la nieta, ha bajado del segundo piso de la casa en Ciudad de México y explica con su conocimiento de enfermera que Norma es diabética e hipertensa, diagnosticada desde hace 28 años.

Además tiene neuropatía, principalmente en la pierna derecha y, por tanto, la movilidad se complica hasta para ir al baño y más aún desde que ocurrió aquel accidente por el ímpetu del perrito.

“Aquí en la casa se le cambia el pañal, en la mañana yo bajo y le ayudo antes de irme al trabajo, la traigo a la cocina, y por la noche tengo un timbre que ella toca si hay una emergencia” describe con paciencia, tomándola del brazo.

“Es el ciclo de la vida”, resume Brenda.

Si Norma sale a la tienda o a ver si ya le depositaron su pensión en el banco, se ayuda con un bastón y se encorva al caminar. La nieta le dice que se enderece, pero ella dice que así se siente más cómoda, hecha bolita, pero avanzando.

Y así, el gobierno de Trump quiere que vaya y se presente. [\(Gardenia Mendoza, Milenio, Fronteras, p. 13\)](#)

Información Migratoria Internacional

Estados Unidos

“¡Fuera ICE!”, exigen durante paro masivo en Mineápolis



Mineápolis. Una vasta red de sindicatos, organizaciones progresistas y clérigos llevaron a cabo ayer un “apagón económico” y una movilización masiva en Mineápolis, con cientos de negocios y escuelas cerradas en protesta contra la violenta aplicación de las leyes migratorias del presidente Donald Trump por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las protestas se extendieron a otras ciudades como Nueva York y Washington, y a estados como Pensilvania, Carolina del Sur, Indiana, California y Florida.

Miles de residentes de Minesota salieron a las calles para exigir el retiro de los agentes de inmigración con la consigna “¡Fuera ICE! ¡Fuera ICE!”, que resonaba al unísono.

“Realmente queremos que el ICE se vaya de Minesota, y no se van a ir a menos que haya una gran presión sobre ellos”, declaró Kate Havelin, de Indivisible Twin Cities, uno de los más de 100 grupos que organizaron la movilización.



La policía arrestó a unos 100 clérigos en el aeropuerto más grande del estado, quienes protestaban contra la participación de Delta Airlines en la deportación de inmigrantes, señaló Trevor Cochlin de Faith in Minnesota, otro de los grupos organizadores.

La Comisión de Aeropuertos Metropolitanos afirmó que los detuvieron fuera de la terminal cuando “excedieron las estipulaciones de su permiso para manifestarse y afectaron las operaciones de las aerolíneas”.

Los organizadores reportaron que más de 700 negocios de todo el estado cerraron en solidaridad con la protesta. “Estamos logrando algo histórico”, aseguró Havelin.

El movimiento se planeó como la mayor manifestación desde que la administración Trump comenzó su cacería de migrantes en ese estado, y se llevó a cabo a pesar de las bajas temperaturas, que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estuvieron entre 20 y 30 grados centígrados bajo cero.

El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Vol-ker Turk, instó al gobierno estadounidense a garantizar que sus políticas migratorias respeten los derechos individuales y el derecho internacional.

El funcionario pidió una investigación independiente sobre el creciente número de muertes que se han producido bajo custodia del ICE, que son 36 en total: 30 durante 2025 y seis en lo que va de este año.

“Las personas están siendo vigiladas y detenidas, a veces de forma violenta, incluso en hospitales, iglesias, mezquitas, tribunales, mercados, escuelas y dentro de sus propios hogares, por la mera sospecha de ser migrantes indocumentados”, declaró Turk.

En este contexto, un juez dictaminó que los testigos de la muerte por asfixia del cubano Geraldo Lunas Campos (<https://shorturl.at/pO6Jh>), quien se encontraba bajo custodia del ICE en Texas, no pueden ser deportados por tratarse de un homicidio.

Good murió de tres balazos, revela autopsia

La autopsia independiente encargada por la familia de Renee Good, asesinada por un agente del ICE en Mineápolis, concluyó que recibió al menos tres disparos por parte del uniformado.

La supervisora interina de la Oficina Federal de Investigación (FBI) del Escuadrón de Corrupción Pública en la oficina de campo de Mineápolis, Tracee Mergen, renunció la semana pasada mientras la investigación del asesinato de Good continúa, reportó CBS News. [\(Ap, Reuters y Afp, La Jornada, Ocho columnas y Mundo, p. 17\)](#)
[\(AP, La Razón, Informativa, p. 13\)](#)
[\(AFP y EFE, El Sol de México, Munco, p. 23 y La Prensa, Mundo, p. 15\)](#)
[\(AFP y Reuters, Excélsior, P.p. y Global, p. 21\)](#)
[\(AP, Reforma, Internacional, p. 10\)](#)

Crucifijos, el foco de deportaciones



TUCSON. El Consulado de México en Tucson, Arizona llamó a paisanos que circulan por autopistas estadounidenses que respeten estrictamente las leyes de tránsito y eviten colgar objetos religiosos como crucifijos o aromatizantes, en el espejo retrovisor del parabrisas, porque agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están realizando operativos y aprovechando cualquier pretexto para deportarlos.

En el mensaje difundido a través de Facebook, Instagram y TikTok, @consulmextucson, Jesús Gutiérrez Monroy, cónsul de Protección y Sandra Orozco, encargada de Documentación, señalaron que la SRE está informada y atenta de una serie de detenciones de mexicanos ocurridas en el condado de Pinal, particularmente en un tramo de la autopista interestatal 10, que conecta Nuevo México con California, atravesando por Arizona.

"Tenemos cinco consejos básicos para evitar alguna detención mientras conduces: primero, tener en buen estado el automóvil; dos, respetar los límites de velocidad y las reglas de tránsito, como por ejemplo, mantener una distancia entre tu auto y los demás; tres, portar el cinturón de seguridad; cuatro, no tener vidrios polarizados o artefactos que obstaculicen la visión como aromatizantes, objetos religiosos o adornos; tener una licencia de conducir local, seguro del auto y placas vigentes", advirtió Orozco.

El responsable de la Protección Consular dijo que ante una situación de detención, el ciudadano tiene derecho a preguntar a los agentes: ¿Estoy detenido? O ¿Soy libre de irme?.

"I'm detained? O, I'm free to go?, es importante realizar estas preguntas para evitar una retención ilegal", detalló.

La publicación en redes sociales del Consulado Mexicano viene acompañada de una leyenda donde explican que es importante evitar cometer infracciones de tránsito que lleven a una detención migratoria.

En caso de ser detenido o tener alguna duda sobre estas y otras situaciones relacionadas con temas de migración, el Consulado de México en Tucson puso a disposición de paisanos el número del Centro de Atención y Asistencia a Personas Mexicanas que opera las 24 horas del día todo el año el teléfono (+001) 520 623 7874.

Las infracciones o accidentes de tránsito se han convertido en una causa común de detenciones migratorias que derivan en la deportación de paisanos, viajeros o turistas extranjeros, que son expulsados con cualquier pretexto, principalmente cuando son latinos o mexicanos en territorio estadounidense. *(Daniel Sánchez, Excélsior, Nacional, p. 12)*

Ciudades santuario pelean con Trump



Miami.— El presidente Donald Trump anunció el 13 de enero pasado que dejará de enviar dinero a las ciudades santuario si no se alinean a su estrategia de operativos antiinmigrantes; esas zonas respondieron con ir a los tribunales. Cuando en Washington le preguntaron qué tipo de fondos concretos se verían afectados, el mandatario respondió, “ya lo verán, será significativo”.



“Ese vacío de precisión es central porque ciudad santuario no es una categoría jurídica cerrada en el derecho federal”, señala Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), a EL UNIVERSAL.

El Servicio de Investigación del Congreso (CRS), que es el órgano de análisis del Congreso de EU, subraya que “no hay una definición legal” en un estatuto federal de qué constituye una jurisdicción santuario y explica que el término suele referirse a políticas locales que limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración en asuntos civiles, no necesariamente en delitos.

En la práctica, ese santuario suele significar que “la policía local no actúa como extensión rutinaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni detiene a personas sólo por una solicitud administrativa”, explica Cabrera; “también tiene que ver con límites para cumplir retenciones pedidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) más allá de un margen breve”. El CRS recuerda que muchas políticas permiten cooperación en delitos penales, mientras restringen participación en la aplicación civil de inmigración, que es justamente donde Trump busca obligar un alineamiento total.

La jueza Mary McElroy apuntaló un triunfo a finales de 2025 para la coalición de 12 fiscales generales estatales que, tras ser advertidos hace unos meses de que sus estados enfrentarían una reducción drástica de subvenciones federales por ser considerados “jurisdicciones santuario”, presentaron una demanda contra el gobierno; la querella, promovida por estados gobernados por demócratas, sostiene que Trump está usando el dinero federal como palanca de presión política y fue respaldada por los fiscales generales de California, Illinois, New Jersey, Rhode Island, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, además del gobernador de Pennsylvania; alegaron que esos recortes los dejaban expuestos a “daños irreparables” ante riesgos como el terrorismo, los desastres naturales y emergencias de gran escala. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, sostuvo que “el anuncio del presidente Trump de que intentará cortar fondos federales a Chicago por razones políticas es descaradamente inconstitucional e inmoral”; añadió que serán “implacables” hasta “recuperar cada dólar” retenido porque “son fondos que pertenecen a la gente de Chicago, no al presidente”.

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, también anticipó pleito, dijo que, por los recortes y amenazas, ha sido “probablemente el año más difícil” de su gubernatura porque el estado “no puede reemplazar” fondos federales que son “demasiado grandes”.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani dijo que “nuestros valores y nuestras leyes no pueden ser fichas de negociación”, y prometió que “siempre defenderé esta ciudad y a cada persona que llama hogar a esta ciudad, incluso frente a amenazas de retener fondos”.

La gobernadora Kathy Hochul dijo que Nueva York “trabjará con el gobierno federal para ir por criminales peligrosos”, pero que no apoyará “ataques agresivos” a familias trabajadoras y cerró: “Si intentan ir por el financiamiento del que dependen los neoyorquinos, nos veremos en la corte”.

La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), una de las redes más influyentes del estado, citó a su presidente y director ejecutivo, Murad Awawdeh, diciendo que castigar a estados y ciudades que se niegan a participar en ataques “inhumanos y crueles” contra inmigrantes “es una simple táctica de acoso de patio de recreo” y advirtió que “familias trabajadoras, niños y personas mayores” pagarían el precio. Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, confirmó a este diario que “los inmigrantes son el motor de nuestra economía local y cuando las familias inmigrantes se sienten seguras, toda nuestra región prospera”. El Centro de Defensa Legal de Inmigrantes (ImmDef) en voz de su presidente, Álvaro Huerta, afirmó que “las personas inmigrantes en California no son criminales” y que “merecen dignidad y respeto”.

Desde Chicago, a través de su propio ecosistema proinmigrante a través del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) confirmaron a este medio que leyes como la TRUST Act de Illinois y las ordenanzas de bienvenida de Chicago y el condado de Cook nacieron con “fuerte apoyo bipartidista” porque, dicen, hacen a las comunidades más seguras: reducen el miedo a pedir ayuda en emergencias o denunciar delitos y evitan que la policía local quede atrapada en tareas federales.

“El presidente Trump intenta usar la billetera federal para obligar a gobiernos locales a ejecutar políticas federales y las ciudades responden que eso viola el equilibrio de poderes y el federalismo”, comenta Cabrera. Incluso el CRS resume que parte de la disputa es que “los términos son ambiguos y permiten decisiones discrecionales sobre cuál entidad califica como ciudad santuario”. “El mensaje a su base es que castigará a las ciudades y lugares santuarios”, señala CHIRLA; “y otra [consecuencia] jurídica es que podría intentar afectar fondos más vulnerables a condiciones administrativas”, dice.

En Chicago, el profesor Nadav Shoked, de la Escuela de Derecho Pritzker de Northwestern, advirtió que no todas las partidas son iguales; dijo que si el gobierno recorta el mismo tipo de dinero que ya fue bloqueado antes, la ciudad ganará, pero “si es otro tipo de dinero, quién sabe”. [\(Max Aub, El Universal, P.p. y Mundo, p. A11\)](#)

Trump quiere a la OTAN en la frontera con México



Donald Trump sugiere que debió pedir a la OTAN que protegiera la frontera sur de Estados Unidos de inmigrantes ilegales, invocando el Artículo 5.

A través de una publicación en Truth Social hecha durante la tarde de este jueves 22 de enero, el presidente de Estados Unidos sugirió que se debería “poner a prueba” a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En el mensaje señala que Estados Unidos debería invocar el Artículo 5 de la OTAN para obligarlos a ir al país y defender la frontera sur de invasiones de inmigrantes ilegales, para que de esa forma los agentes de la Patrulla Fronteriza sean libres de realizar otras tareas.

“Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligarla a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de nuevas invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así a un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas”. Fue lo mencionado en sus redes sociales.

¿Qué dice el artículo 5 de la OTAN?

El Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que menciona Donald Trump en su publicación, establece que en caso de un ataque armado contra un miembro de esta organización, este se considerará un ataque contra todos los integrantes de la OTAN.

Por lo que, sus integrantes estarán obligados a que cada miembro acuda en su ayuda y defensa a quien esté siendo atacado. Aunque cabe mencionar que la ayuda puede o no implicar el uso de la fuerza armada, además de otras acciones que los Aliados consideren necesarias.

El Artículo 5 ha sido invocado una sola vez desde su creación y fue por parte de Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

¿Qué países integran la OTAN?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se encuentra integrada por 32 países, los cuales, en caso de que Donald Trump decidiera invocar el Artículo 5, tendrían que responder si se determinara que hubo un ataque armado contra Estados Unidos.

Los 32 miembros de la OTAN son: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Eslovaquia, España, Estonia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Turquía. ([*Celeste Román Marañón, La Crónica de Hoy, Nacional, p. 6*](#))

Mundial de Fútbol FIFA 2026

De cara al Mundial, la CIA capacitó a elementos de seguridad mexicanos

De cara al Mundial 2026, elementos de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales (UMOE) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), grupo de élite que fue conformado por el hoy secretario federal del ramo, Omar García Harfuch, ha tomado capacitación.

El reporte anual 2025 de la coordinación general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales y de la Dirección General de Operaciones de Reacción e Intervención Inmediata, da cuenta que los elementos de la UMOE han participado en estas estrategias y talleres.

En el documento oficial se desprende que tomaron el Curso Internacional de Armas y Explosivos en la sede de la CIA; sin embargo, no se detalla cuáles fueron las hipótesis que se plantearon en el mismo.

Otro fue un entrenamiento para instructores de esta área de la SSC en Táctica y Operativa en Eventos Masivos, el cual fue impartido en El Rancho, Texas, en el vecino país del norte.

Los elementos de la UMOE también fueron instruidos en una preparación especializada en detección radiológica, y participaron en una planeación estratégica que se hizo de manera trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México, ante “amenazas nucleares y radiológicas”.

Como parte las planeaciones operativas que se espera sean implementadas durante la justa deportiva, los efectivos tomaron el Taller de Seguridad Física y Nuclear en Eventos Masivos, según se lee en el documento.

No sólo eso, en el mismo reporte anual también se precisa una estrategia que se implementa ya en la ciudad como parte del refuerzo en la estrategia de seguridad denominada Servicios Ehcatl, donde elementos de la UMOE armados realizan sobrevuelos tácticos con el agrupamiento Cóndores como apoyo para atender incidentes y emergencias.

Si bien Ehcatl no fue pensada para el Mundial 2026, sí será una herramienta utilizada en los días que haya partidos en la ciudad, precisaron fuentes.

“Constituye un refuerzo estratégico en materia de vigilancia y reacción, incrementando la capacidad institucional para atender de manera más eficaz las demandas de seguridad en la capital.”

El jueves pasado, el jefe de la policía capitalina mencionó que la SSC y la ciudad se encuentra preparadas para la estrategia de seguridad que se implementará durante la Copa del Mundo, la tercera que se efectúe en este país, en esta ocasión como sede compartida con Canadá y Estados Unidos. [\(Kevin Ruiz, La Jornada, Capital, p. 24\)](#)

Manifestantes explotan contra el Mundial de Fútbol FIFA 2026





Al grito de "Queremos vivienda, el Mundial nos vale v...a" y "Queremos trabajo, la FIFA al carajo", un grupo de manifestantes se reunió en el reloj de la Copa del Mundo que marca la cuenta regresiva para el inicio de la justa mundialista, con la intención de exigir que paren los actos que atentan contra la vivienda, al igual que la violencia contra los comerciantes y habitantes de la zona de Santa Úrsula se detenga.

"El Mundial de Futbol FIFA 2026 representa una oportunidad para acelerar el proceso de despojo, limpieza social y gentrificación que se ha impulsado en la CdMx por Morena, el PRI y el PAN, en sexenios anteriores". expresó Natalia Lara, una de las cabezas de las organizaciones y colectivos denunciantes de estos hechos.

Acompañado por habitantes del Pueblo de Santa Úrsula, así como comerciantes de los bajopuentes de Tlalpan y vecinos del Estadio Azteca, el colectivo recalcó los daños que traerá para el sector inmobiliario el máximo torneo de futbol a nivel mundial, organizado por la FIFA, que no pagará impuestos por el usufructo del país.

"El Mundial 2026 trae un sinnúmero de consecuencias, que van desde la contaminación, el desplazamiento forzado de familias populares, comunidades y pueblos originarios, el despojo de bienes comunes -como el agua-, hasta el aumento del costo del alquiler en un 155 por ciento, de acuerdo con la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI)", remarcó Lara.

Con el reloj que tiene la cuenta regresiva para el arranque de la Copa del Mundo, el grupo de cerca 40 personas reivindicó su derecho a contar con una vivienda digna que les permita recuperar la certeza que perdieron tras confirmarse que la FIFA organizaría aquí el Mundial.

"Lo que exigimos es nuestro derecho a habitar dignamente nuestros pueblos que se encuentran dentro de la CdMx. Dignidad que tiene que ver con una vivienda amplia que permita protección, descanso y la multiplicación de nuestras familias, con un ambiente sano, es pacios públicos para disfrutar, y una ciudad que en lugar de expulsarnos nos acoja y proteja a las comunidades y pueblos oOriginarios que la habitamos y la hemos cuidado por décadas", agregan.

Tras la declaración de intenciones, el colectivo remarcó el pliego petitorio en el que además de solicitar la creación de una mesa de atención se solicita que se regulen el uso de plataformas que atentan contra la libre vivienda, como Airbnb, así como los proyectos de vivienda populares que no son para el mercado inmobiliario.

Se solicitó la creación de nuevas leyes de renta que garanticen un costo justo, asequible y razonable que no se preste a la especulación financiera, uno de los principales problemas que zonas como la colonia Roma o Condesa vivieron en la última década.

Es así como el movimiento declaró sus intenciones a menos de seis meses del arranque de la justa mundialista, un evento que aseguran podría traer más consecuencias que beneficios para una Ciudad de México que durante años ha aquejado problemas de vivienda.

INGRESOS EN RIESGO

Desde hace más de cuatro décadas, la comerciante Elena Botello Rosas ha trabajado en la calzada de Tlalpan, pero en estos últimos meses ha visto cómo las remodelaciones de cara a la justa mundialista le han arrebatado su forma de ingreso.

"Yo soy comerciante de flores y plantas, pero en los pasos de arriba de la Calzada de Tlalpan, ya quitaron todos los puestos, quitaron todo por el Mundial y ahora nos quieren desalojar de los pasos a desnivel, con el pretexto del Mundial", explicó durante la manifestación.

"Me afecta, porque viene el Mundial 15 días, estoy de acuerdo, cierro mi local, pero, ¿qué me garantiza que después voy a regresar y me van a regresar mi espacio de trabajo. No soy solo yo, somos casi 500 personas y la mayoría somos de la tercera edad. Yo lo que peleo es que por favor nos dejen trabajar. Hemos mantenido esos pasos a costo de los compañeros", agregó.

Según Elena Botello, no hubo diálogo previo, simplemente las autoridades llegaron a reclamar un espacio que durante años estuvo a la sombra de una calzada que día con día ve transitar a miles de automovilistas y peatones.

"Nos dijeron que se venía el mundial y que teníamos que desalojar estos pasos a desnivel porque van a arreglar, van a renovar. Tengo 40 años, nunca había entrado ahí ni la delegación, ni la jefa, ni nadie. Han pasado presidentes y nos han abandonado. Metimos luz, limpiamos, echamos piso por costo nuestro. de lo que nosotros trabajamos", reitera. *(Eduardo Pigeón /Esto, La Prensa, Metrópoli, p. 7 y El Sol de México, Metrópoli, p. 21)*

Seguridad

Regalo al FBI



Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense y considerado por el FBI como uno de los fugitivos más buscados, fue capturado el jueves por la noche en México y extraditado a los Estados Unidos, así lo informaron tanto autoridades de la Unión americana como Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

La detención de Wedding se dio justo en el momento en que Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, actual fiscal General de la República sostenían una reunión con Kash Patel, director del FBI, en las oficinas de la FGR, donde pactaron más estrategias para seguir trabajando en coordinación y beneficio de la seguridad de ambas naciones y sin dar tregua a los grupos del crimen organizado.

Wedding, de 44 años, fue considerado por el FBI como un capo a la altura de El Chapo Guzmán, por dirigir una red transnacional de narcotráfico, por lo que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que facilitara su captura

Las autoridades estadounidenses aseguraron que Wedding vivía en México bajo la protección del cartel de Sinaloa, donde dirigía y participaba en una operación de narcotráfico transnacional que enviaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, pasando por México y el sur de California en Estados Unidos y Canadá.



La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó este viernes que Wedding fue trasladado en avión a territorio estadounidense desde México tras su arresto.

¿Fueron los gringos del FBI?

Pero tras la captura de Ryan Wedding hay dos versiones que no cuadran, ya que la fiscal Pam Bondi afirma que, bajo sus órdenes, fueron agentes del FBI quienes lograron la detención en suelo mexicano:

“Wedding fue trasladado en avión a Estados Unidos, donde enfrentará la justicia. Esto es resultado directo del liderazgo del presidente Trump en materia de ley y orden”, dijo.

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, agradeció el trabajo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses:

“Un agradecimiento especial a nuestros increíbles socios en México que hicieron posible esto: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson”.

Fue entrega voluntaria García Harfuch

Pero aquí nace la duda, ya que Omar García Harfuch afirmó a través de un comunicado, que Ryan Wedding se entregó de forma voluntaria en la Embajada de Estados Unidos en México y resaltó las reuniones que sostuvieron con el director del FBI, Kash Patel:

“Ayer recibimos la visita del director del FBI , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC-México y otra con la Oficina de la fiscal General de la República”.

Y destacó: “La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”.

Aquí el asunto no queda del todo claro, de cómo fue realmente la captura de Ryan Wedding. ¿Fueron los gringos del FBI? ¿Una acción conjunta o en serio, se entregó de forma voluntaria?

Ron Johnson: se entregó de forma voluntaria

Mientras tanto, el embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson, afirmó en un comunicado que Wedding se entregó de forma voluntaria y esto gracias al trabajo conjunto entre autoridades de seguridad de ambas naciones.

También destacó el combate del gobierno de Donald Trump contra el tráfico de drogas y fentanilo y de no dar tregua a los delincuentes que envenenan a la sociedad estadounidense.

Johnson dejó claro que la captura de Wedding “es un claro ejemplo del trabajo decidido de múltiples autoridades de ambos países”, en las que destacó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Fiscalía General de la República, así como al Departamento de Justicia y el FBI de los Estados Unidos.

El embajador destacó el diálogo y la cooperación de los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump.

“Wedding es la versión moderna del Chapo Guzmán”

La detención de Wedding abre muchas interrogantes, pero una situación sí está muy clara, es que el mandamás del FBI Kash Patel se fue muy feliz de nuestro país, con uno de los objetivos que los traía vueltos de cabeza.

No por nada en la conferencia de prensa que dio apenas llegar a Estados Unidos afirmó:

“Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán”, uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica”. [\(Alfredo Sosa, La Prensa, Ocho columnas y Policía, p. 20\)](#)

[\(Gustavo Castillo García, La Jornada, P.p. y Política, p. 3\)](#)

[\(Tania Gómez, La Razón, Ocho columnas e Informativa, p. 3\)](#)

[\(Almaquio García, El Heraldo de México, Ocho columnas\)](#)

[\(Ángel Hernández, Milenio, Ocho columnas y Justicia, p. 4\)](#)

[\(Agencias y Eduardo Dina, El Universal, P.p. y Nación, p. A6\)](#)

[\(José Díaz Briseño, Benito Jiménez y Claudia Guerrero, Reforma, Ocho columnas\)](#)